Modifica la ley N° 19.880, que Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, para aplicar el principio de transparencia ante el eventual favorecimiento de parientes de autoridades en virtud de dichos actos

Boletín N°10860-06

Considerando que:

1. La ley 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado, señala que estos están sometidos, entre otros, a los principios de imparcialidad, transparencia y publicidad.

2. El respeto a los principios señalados resulta esencial para materializar la acción estatal orientada a servir y beneficiar objetivamente a las personas; e impedir la decisión subjetiva e ilegal que favorece a personas que se sirven del Estado en función de su parentesco o afinidad político-partidista.

3. El Artículo 11, de la señalada Ley, dice que el principio de imparcialidad consiste en que: "La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte". Y, en cuanto a las exigencias formales señales que: "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amanecen su legitimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos."

4. El conocimiento de situaciones, como contrataciones, adjudicaciones, nombramientos y resoluciones en general, que favorecen a parientes de autoridades de Gobierno y del Congreso Nacional se divulgan y conocen cuando estas ya se encuentran consumadas o en un estado de avance significativo ,que dificulta realizar respecto de ellas un control previo y oportuno para impedirlas; lo anterior no resulta coherente con el principio de Transparencia y de Publicidad, que persigue que el procedimiento administrativo permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.

5. Lo indicado ha afectado sensiblemente la transparencia y la confianza en las instituciones a las que se asocian las autoridades cuyos parientes han sido eventualmente beneficiados de forma ilegal. A título meramente ejemplar, y ocurrido en los últimos meses, se puede mencionar el caso Caval respecto del Gobierno, el intento del SERVIU de favorecer a parientes de Diputados de la Región de Magallanes o caso Morano-Boric y más de un centenar de nombramientos y contrataciones de parientes de dirigentes de partidos políticos, parlamentarios y autoridades de gobierno.

6. Lo señalado justifica un modificación legal que obligue a todos los funcionarios públicos intervinientes en un procedimiento administrativo a expresar y dejar constancia escrita en los actos y resoluciones correspondientes del hecho de tener conocimiento de los parentescos que vinculan a eventuales contratantes, adjudicatarios o beneficiarios, en cualquier calidad ya sea como personas naturales o jurídicas; con las autoridades que señalan. Para estos efectos el parentesco debe extenderse a los grados que la misma ley consagra para determinar el deber de abstención de su artículo 12 Nº 2; esto es: consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.

   Vengo a presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Para incorporar en la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, entre los actuales artículos 16 y 17 el siguiente artículo 16.-bis, que establece:

Artículo 16.-bis: en todos los actos administrativos que pueden eventualmente favorecer a personas que tengan los grados de parentesco que señala el Nº 2 del artículo 12 respecto de la Presidenta de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Jefes de Servicio, Sanadores y Diputados, este hecho deberá señalarse expresamente en todas las resoluciones que se dicten en el correspondiente procedimiento administrativo.